

Coca, café y cacao: lucha contra las drogas y estrategias de vida en agricultores del valle del Monzón

Luciana Grillo*

* Licenciada en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Actualmente se desempeña como analista en el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) en las áreas de investigación, recaudación de fondos y diseño de proyectos. Correo electrónico: grillo.luciana@pucp.pe

Fecha de recepción: 8/07/2019. Fecha de aceptación: 12/12/2019.



<https://doi.org/10.18800/debatesensociologia.201802.004>

Coca, café y cacao: Lucha contra las drogas y estrategias de vida en agricultores del valle del Monzón

RESUMEN

El objetivo de la presente investigación es analizar de qué manera la implementación de iniciativas estatales en materia de lucha contra las drogas se relaciona con la configuración de estrategias de vida en agricultores del valle del Monzón. Para ello, se (a) identifica cómo se desarrolló el proceso de implementación en materia de lucha contra las drogas en el valle; (b) caracterizan las narrativas y prácticas construidas por los agricultores a partir de la aplicación de estas iniciativas; y (c) analiza de qué forma la interrelación entre el proceso de implementación y los capitales de la población se vincula con las estrategias de vida configuradas. El estudio, cualitativo y exploratorio, encuentra que las consecuencias de las iniciativas estatales en los grupos sociales del valle ha variado a partir de factores como el origen, edad, género, experiencia agrícola previa y ubicación de las parcelas, los cuales se expresan a manera de capitales que facilitan o restringen las decisiones de los actores rurales. A partir de ellos, los agricultores desplegarán estrategias de vida distintas, las cuales se evidencian mediante prácticas y narrativas desarrolladas para adaptarse y dar sentido al proceso que ahora viven.

Palabras clave: territorio; estrategias de vida; desarrollo rural; narcotráfico; capitales.

Coca, coffee and cacao: Drug control policy and life strategies in farmers of the Monzón Valley

ABSTRACT

The objective of this research is to analyze how the implementation of state initiatives in drug control policy is related to the configuration of life strategies in farmers of the Monzón Valley. To do this, it (a) identifies how the implementation process was developed in drug control policies; (b) characterizes the narratives and practices constructed by farmers based on the application of these initiatives; and (c) analyzes how the interrelation between the implementation process and the capitals of the population is linked to the configuration of life strategies. The study, qualitative and exploratory, finds that the consequences of state initiatives in the social groups of the valley varies because of factors such as origin, age, gender, previous agricultural experience and location of the plots, which are expressed as capitals that facilitate or restrict the decisions of rural actors. From them, farmers will deploy different life strategies, which can be observed as practices and narratives developed to adapt and give meaning to the process they now live.

Keywords: territory; livelihoods; rural development; drug trafficking; capitals.

1. INTRODUCCIÓN

La lucha contra las drogas es un fenómeno global que se expresa de formas diferentes en los ámbitos locales. Debido a que el Perú se vincula a la economía ilícita de las drogas principalmente como abastecedor de hoja de coca, la mayoría de las intervenciones implementadas desde el Estado y organizaciones internacionales se han enfocado en el cultivo de esta materia prima.

El valle del Monzón es un territorio que, por varias décadas, se dedicó fundamentalmente al cultivo de coca ilícita. Esto lo llevó a consagrarse por varios años como el principal centro de producción de este producto, razón por la que en la década de 2000 se llevaron a cabo operativos policiales esporádicos que buscaban incautar insumos y destruir laboratorios clandestinos. Sin embargo, no fue hasta 2012 que el Estado ingresó al valle con el objetivo de implementar de manera continua los programas de erradicación y desarrollo alternativo, con miras a que ello posibilitara la desestructuración de la economía ilícita en el territorio. Es así que, a partir de ese año, el Monzón ha experimentado un decrecimiento radical en la cosecha de hoja de coca ilegal, la cual ha sido reemplazada por parte de los agricultores por café y cacao. El presente artículo busca comprender la relación existente entre la implementación de iniciativas estatales en materia de lucha contra las drogas y la configuración de estrategias de vida de agricultores del valle del Monzón, en Huánuco. A partir de ello, se dará cuenta de cómo, en un contexto que ha experimentado una transformación reciente de sus dinámicas sociales, económicas y políticas, se ha vivido también un cambio en la configuración de estrategias desplegadas por la población. Observar cómo han cambiado las narrativas y prácticas de los productores permitirá tener un conocimiento más profundo respecto a las consecuencias que estas intervenciones tienen en la vida cotidiana de los individuos. Asimismo, se podrán conocer los resultados diferenciados que una misma iniciativa tiene sobre las personas, aun cuando se encuentran dentro de un mismo espacio territorial.

El texto se organizará en cinco secciones. Primero, se presentan el estado del arte y los enfoques teóricos utilizados para el análisis del fenómeno. Segundo, se expone la metodología del estudio. Tercero, se muestran sus hallazgos principales, divididos en tres secciones: contexto, proceso de implementación de iniciativas estatales, y estrategias de vida. Finalmente, se realiza una discusión de los hallazgos y se presentan conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio.

2. ESTADO DEL ARTE Y ENFOQUES TEÓRICOS

El cultivo de coca para fines tradicionales tiene lugar en el país desde hace siglos. Sin embargo, el aislamiento del alcaloide activo de la planta para la producción de cocaína, y la posterior popularización de esta en países como Estados Unidos a finales

del siglo diecinueve, generó un aumento en la demanda de hoja de coca y el comercio de sus derivados (Parra y Guerra, 2014, p. 92). Durante esa época, en el Perú se desarrollaba una industria legal de la droga, promovida por científicos que celebraban sus múltiples beneficios médicos a nivel internacional (Gootenberg, 2008, 2010).

Con el pasar de los años y la acentuación de su consumo recreativo, el debate internacional impulsó la creación de prohibiciones hacia la cocaína, forjando leyes e instituciones dirigidas a la restricción de su oferta. Anuladas las posibilidades de una industria legal, a mediados del siglo veinte surgiría una cadena de producción y comercialización de cocaína ilícita, en la que el Alto Huallaga participaba directamente. En este escenario, el foco de atención de la «lucha contra las drogas» se ha concentrado principalmente en países como Perú, Colombia y Bolivia, únicos países productores de hoja de coca en el mundo (Manrique, 2015, p. 68).

Así, gran parte de los esfuerzos realizados se focalizan en los agricultores, quienes se dedican a la hoja de coca por la mayor rentabilidad y facilidad que implica su cultivo (Zevallos, 2012, p. 60). En 2000, aproximadamente 50 mil personas estaban involucradas directamente en el cultivo y producción de coca, y de las 2 millones de personas que habitaban los departamentos de las cuencas cocaleras del país, la mitad dependía de la actividad. Quienes cultivan, cabe resaltar, vienen principalmente de economías familiares campesinas con poco uso de mano de obra asalariada; ya que, a diferencia de lo que ocurre en Colombia, el cultivo en Perú se da a pequeña escala, en una extensión cocalera que usualmente va de 0,5 a 2 hectáreas (Cabieses, 2000a, pp. 617, 618).

Diferentes académicos han estudiado el fenómeno, resaltando los aciertos y limitaciones de las políticas aplicadas en el territorio peruano. Al respecto, Zevallos (2014) plantea que la erradicación es una forma de cumplir con metas cuantificables, sin atacar los problemas estructurales que caracterizan la economía rural de zonas sin presencia estatal. Por ello, los mecanismos de control de cultivos no logran atender los intereses y carencias que impulsan a los agricultores a cultivar coca ilícitamente, teniendo como resultado que ellos únicamente demanden el programa de desarrollo alternativo.

Sin embargo, Cabieses (2000a, 2000b, 2010) cuestiona la eficacia de esta iniciativa, señalando que su estrategia de mono producción no es coherente con la diversidad de la zona en la que se aplica, ya que la fragilidad ecológica y la calidad de los suelos la vuelven no apta para ese tipo de agricultura (Cabieses, 2010, p. 7). Además, el autor cuestiona la decisión de vincular a los pequeños agricultores a mercados internacionales, en tanto ello generaría dependencia a las fluctuaciones de los precios globalizados (Cabieses, 2010, p. 8). Por otro lado, critica el carácter vertical y no dialogante de la estrategia, a la cual acusa de crear asociaciones, juntas y cooperativas que funcionan como plataformas de diálogo y canalización de demandas, en lugar de fortalecer las instancias organizativas ya existentes en las zonas en las que los programas inciden (Cabieses, 2000b, p. 79).

Este accionar estatal, como lo señala Scott (1998), responde a una lógica intrínseca del Estado moderno centralizado. Para el autor, debido a su necesidad de regir sobre una población y territorio extenso, este actor no cuenta con la capacidad necesaria para aplicar políticas que respondan a las particularidades de cada espacio geográfico y social. En ese sentido, para «hacer legible» su ámbito de gobernanza, el Estado hace uso de herramientas de información (tales como censos, por ejemplo) que estandarizan a la población y le proveen instrumentos para gobernar sobre ella. De esta manera, es a partir de la homogeneización de los territorios que el Estado interviene sobre ellos, lo cual dificulta un accionar que responda a las necesidades y oportunidades de cada espacio.

En este marco, resulta relevante acudir a un enfoque territorial, a través del cual se reconozca la forma en que las dinámicas sociales, económicas y políticas interactúan con la geografía, comprendiendo que los fenómenos no son independientes del territorio en el que se inscriben, sino que se construyen en interrelación con él. Esto, a su vez, implica comprender que el territorio no es un espacio físico «objetivamente existente», por lo que no puede delimitarse técnicamente a partir de variables físicas o económicas (Schejtman y Berdegué, 2004, pp. 29, 33). En ese sentido, se lo postula como una construcción social, escenario de actividades cotidianas en el que se construyen las percepciones, creencias y valores que orientan la acción social, y se origina y expresa una identidad y un sentido de propósito compartido por múltiples actores (Cliche, Ranaboldo y Serrano, 2015, p. 62; Schejtman y Berdegué, 2004, p. 29; Chiriboga, 2010, p. 54). Así, el territorio sería una construcción colectiva, compuesta por experiencias pasadas que alimentan nuevas prácticas sociales, además de ser donde se gestan los comportamientos colectivos y se articulan estrategias para el futuro (Cliche, Ranaboldo y Serrano, 2015, p. 62; Damonte, 2011, p. 13).

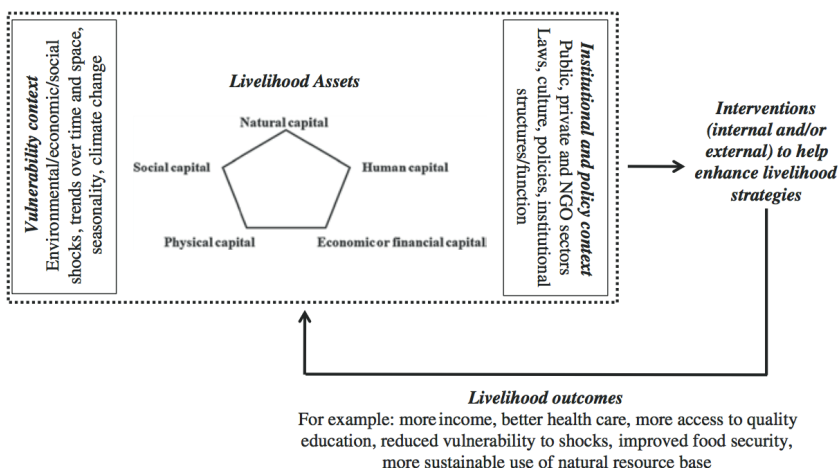
Para comprender los espacios rurales actuales, además, debe reconocerse su conexión con economías informales e ilícitas (Durand, 2016, pp. 22, 23). Esto porque muchos de ellos experimentan la presencia de actores sociales que operan fuera de las reglas formalmente establecidas por el Estado, funcionando bajo su propia normativa y generando nuevos discursos y culturas (Durand, 2016, pp. 26, 27). Así, existen lugares en los que la economía ilícita no solo es la principal fuente de generación de ingresos, sino también la actividad que mayor extensión territorial ocupa (Durand, 2016, p. 30). Estas actividades, además, se encuentran expuestas a las lógicas de la globalización económica, que articula territorios a nivel planetario mediante una cadena económica global, en la que los territorios cumplen roles especializados y tienen como resultado final la producción de una mercancía (Durand, 2016, pp. 28, 29, 56). Desde esta perspectiva también puede analizarse el tráfico ilícito de drogas (TID), siendo que este se organiza mediante eslabones territoriales con objetivos particulares que, a nivel global, conforman una red de

relaciones sociales sustentadas en intereses comunes, sin necesariamente lazos jerárquicos entre ellos (Zevallos y Mujica, 2015, pp. 22, 23, 25).

El hecho de que un territorio se dedique en gran medida a una actividad calificada como ilegal implica la generación de narrativas y arreglos particulares, dirigidos a sostener la práctica. En este contexto, resulta relevante preguntarse por la economía moral desarrollada en el Monzón, entendida como los arreglos económicos, sociales y morales de su sistema económico, que la mayoría de los habitantes está dispuesta a defender (Vizcarra, 2018, p. 44). En los campesinos cocalleros, esta economía moral se basaría principalmente en la asociación del cultivo de coca con la subsistencia y el acceso a mejores condiciones de vida (Vizcarra, 2018, p. 64). En el caso del Monzón, se observa con claridad una justificación del cultivo de coca a partir de esta lógica, dada además en un contexto de ausencia estatal y pocas oportunidades económicas. Adicionalmente, esta economía moral se sostiene en la separación de la producción de hoja de coca como materia prima, y los efectos que posteriormente tiene el producto final en sus consumidores, actividad en la cual los agricultores no se vinculan. En ese sentido, la economía moral del valle se sostiene en la valoración de que los daños generados por el cultivo de coca no afectan el bienestar local, mientras que sus beneficios sí se viven en esa esfera y se utilizan para el alcance de objetivos socialmente legítimos (Vizcarra, 2018, p. 57). Así, la resistencia a las intervenciones dirigidas a la desestructuración del narcotráfico se explican porque ponen en peligro la economía del valle, a través de la cual la mayoría de sus habitantes acceden a sus medios de vida. Para Chambers y Conway (1992, p. 7), el concepto de medios de vida incluye las capacidades, activos —ya sean recursos materiales o sociales— y actividades requeridas por las personas para vivir. Estos se consideran sostenibles cuando pueden hacer frente a tensiones y shocks, mantenerse en el tiempo, proveer oportunidades a las próximas generaciones, y beneficiar otros medios a nivel local y global. Debido a que la adopción de estrategias de vida sostenibles posibilita un mayor progreso en la reducción de la pobreza, es importante que su obtención no dependa enteramente de apoyo externo, y que si lo hace, esta fuente sea económica e institucionalmente sostenible (Department for International Development [DFID], 1999, p. 7).

Así, las personas cuentan con diferentes tipos y niveles de recursos, los cuales son desplegados para alcanzar distintos resultados en sus medios de vida (tales como acceso a educación o aumento del ingreso) (Farrington, Carney, Ashley y Turton, 1999, p. 3). La decisión sobre qué estrategia desplegar se relacionaría con aspectos como el lugar y tiempo de nacimiento o el género del individuo (Chambers y Conway, 1992, p. 6), pero también con las vulnerabilidades, estructuras y procesos presentes en el contexto (Farrington, Carney, Ashley y Turton, 1999, p. 3).

Gráfico 1. Representación gráfica del marco conceptual de medios de vida sostenibles



Fuente: Morse, McNamara y Acholo, 2013, p. 19.

De esta manera, el enfoque plantea la existencia de cinco tipos de capitales, los cuales serían utilizados por los agentes rurales para acceder a sus medios de vida. Los dos primeros hacen referencia a capitales que se encuentran en el medio físico: siendo que el natural incluye el *stock* de bienes naturales y los servicios ambientales; mientras que el físico se refiere a la infraestructura, medios de producción y tecnologías del entorno. Por otro lado, los otros tres se encuentran a nivel de las personas, ya que son ellas quienes los adquieren y/o acumulan interna o externamente. El capital humano se refiere a las habilidades, conocimientos, capacidades y trabajos con los que cuentan los individuos, mientras que el financiero es aquel que se encuentra en activos económicos, ahorros, crédito o débito y efectivo. Finalmente, el capital social incluye las redes, reclamos sociales, relaciones sociales, afiliaciones y asociaciones a las que pertenece una persona¹ (Morse, McNamara y Acholo, 2013, p. 28).

Finalmente, y en línea con la experiencia vivida en el Monzón, se resalta la importancia de las instituciones en el acceso a recursos y medios de vida, ya que, al generar obstáculos u oportunidades en los contextos rurales, tienen un rol activo en la composición de estrategias (Scoones, 1998, p. 12). Por tal razón, se plantea la necesidad de analizar el contexto político e institucional en el que los capitales existen, ya que puede que las autoridades limiten o profundicen las situaciones a las cuales estos son vulnerables. Para esto, es importante reconocer el papel y la interrelación entre servicios estatales y no gubernamentales, ya que estos influyen el acceso a recursos, así como las oportunidades y decisiones de las personas.

¹ Al respecto, Portes (1998, p. 15) pide considerar que el capital social puede implicar aspectos negativos en los medios de vida de los individuos, ya que este a veces implica exclusión de «otros», exigencia del grupo hacia los miembros y restricciones en la libertad personal.

3. METODOLOGÍA

Este estudio, cualitativo y exploratorio, está basado en entrevistas y observaciones desarrolladas en el centro poblado de Cachicoto y la capital distrital de Monzón, los centros económico y político del valle, respectivamente. Asimismo, se conversó con productores de los centros poblados de La Granja, Caunarapa, Camote y Tazo Grande, así como con productores cuyas parcelas y hogares se ubicaban en Sachavaca, Matapalo y Santa Rosa de Chacrita. Sin embargo, no se espera que los resultados de este estudio sean generalizables ni para los centros poblados mencionados, ni para toda la extensión del valle. El muestreo de esta investigación no ha sido representativo, siendo que la selección de casos se ha realizado a través de la aproximación a agricultores casa por casa y la estrategia de bola de nieve. Esto permitió acceder a grupos de agricultores que compartían características similares, a la vez que no se limitaba al estudio a una red social en particular.

A través de dos viajes al valle se entrevistaron a 38 productores, 25 de los cuales fueron hombres y 13 mujeres. Todos los entrevistados tenían más de 14 años, razón por la que, según lo planteado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se consideran personas «en edad de trabajar». De ellos, 4 personas eran jóvenes (de 15 a 29 años), 33 eran adultas (de 30 a 59 años), y 1 era adulta mayor (más de 60 años). Por otro lado, 8 de los entrevistados declararon no haber nacido en el valle, sino haber migrado a él cuando aún podía cultivarse coca. Finalmente, respecto al cultivo de hoja de coca previo a la erradicación: 31 personas declararon tener coca cuando llegó la erradicación, 4 señalaron no tenerla, y 2 no contaban con parcelas propias por ser muy jóvenes durante esa etapa. Por otro lado, 24 agricultores se encontraban vinculados con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida); 4 lo estuvieron previamente pero, para el momento de la entrevista, ya no lo estaban; 5 nunca estuvieron vinculados a la institución; de 3 personas no se obtuvo información al respecto; y 2 no contaban con parcelas propias.

Tabla 1. Relación de entrevistados por posesión de coca al momento de la erradicación

Posección de coca al momento de la erradicación	Vinculación con Devida al momento de la entrevista
Sí tenía coca	20 vinculados con Devida
	4 se inscribieron pero ya desvinculados
	5 nunca vinculados con Devida
	3 no se recogió información
No tenía coca	4 vinculados con Devida
No aplica	2 no aplica

Por otro lado, se entrevistaron expertos y funcionarios públicos en Lima y en el Monzón, quienes tenían experiencia laboral previa o actual en instituciones como Devida, el Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (Corah) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). En la primera institución se conversó con funcionarios de la Oficina Central Lima, la Oficina Zonal Tingo María y la Oficina de Coordinación Monzón, así como con los responsables del Proyecto de Recuperación de Suelos (financiado por Devida pero ejecutado por la Municipalidad de Huamalés).

Además de esta información primaria, se acudió a fuentes secundarias que permitieran comprender la situación en el valle antes de la erradicación de coca, así como los lineamientos técnico-políticos a partir de los cuales se interviene en el valle. Por eso, además de la literatura, se examinaron noticias sobre el valle publicadas por los medios La República, El Comercio, Inforegión, RPP e IDL-Reporteros. Asimismo, se estudiaron las Estrategias Nacionales de Lucha Contra las Drogas (ENLCD) 2012-2016 y 2017-2021, así como datos sobre el distrito del Monzón a través del Censo Nacional Agropecuario (Cenagro) de 2012, los Censos Nacionales de 2007 y 2017 y los portales virtuales REDInforma e InfoMIDIS.

4. HALLAZGOS

4.1. Contexto histórico y sociodemográfico del valle del Monzón (1950-2013)

La relación entre Huánuco y la cocaína data de finales del siglo diecinueve, época en la que la región se perfilaba como el centro de la industria legal peruana de esta droga (Gootenberg, 2008, p. 83). La importancia del Alto Huallaga para la elaboración de cocaína se debe principalmente a su geografía histórica, en la cual Huánuco, situado entre la sierra y la selva, mantenía una comunicación fluida con la capital limeña, sirviendo de puente hacia los territorios amazónicos del país (Gootenberg, 2008, p. 85). A esto se suma el comparativamente alto nivel alcaloide de la planta en la zona, así como las leyes liberales emitidas en el país, que facilitaban la apropiación de tierras de montaña a quien declararan una intención económica o de poblamiento (Gootenberg, 2008, pp. 88). En este escenario, para 1900, Huánuco albergaba tres mil cocaleros y la mitad de los cicales plantados a nivel nacional (Gootenberg, 2008, p. 89).

Sin embargo, las prohibiciones globales hacia la droga y el surgimiento del control de narcóticos generaron que, durante la primera mitad del siglo veinte, el precio de la cocaína cayera drásticamente, pasando de ser un *commodity* de orgullo nacional a un bien regional fallido (Gootenberg, 2008, p. 143). Así, a finales de 1920, diversas fábricas de cocaína cerraban en el país, facilitando aún más la concentración de su producción en Huánuco, donde se mantenía el apoyo local para la industrialización de la droga (Gootenberg, 2008, p. 155, 157, 164). Sin embargo, el lanzamiento

de normas e instituciones antinarcóticas internacionales retardaron directamente esta intención, imposibilitando el retorno de la industria legal peruana de cocaína (Gootenberg, 2008, p. 181).

Así, sería entre 1947 y 1965 que surgiría una cadena de producción y comercialización de cocaína ilícita panamericana, promovida por la especulación ilícita y el contexto político de la Guerra Fría (Gootenberg, 2010, pp. 68, 69). Durante esos años, la población alrededor de Tingo María se cuadruplicó, haciendo de Leoncio Prado la provincia de mayor crecimiento poblacional en todo el país (Gootenberg, 2008, p. 294). Para 1980, en el marco del *boom* internacional de la droga, el Alto Huallaga suministraba más de la mitad de la cosecha ilícita de coca y pasta de cocaína a nivel mundial (Gootenberg, 2008, p. 292). Así, esta zona se perfilaba como un punto territorialmente estratégico, atrayendo a traficantes colombianos a la región y conectándola por vía aérea con Leticia, territorio en el que se encuentran las fronteras de Perú, Brasil y Colombia (Gootenberg, 2008, p. 297).

Para el año 2007, Huánuco era el segundo departamento con más hectáreas de hoja de coca cultivadas en el Perú. En él, el 21,3% de la población vivía en distritos con presencia de cultivos, y el Monzón era aquel con la mayor concentración en todo el país (Zevallos, 2012, pp. 44, 45). Entre los años 2001 y 2009, el Monzón producía más del 60% del total de la hoja de coca del Alto Huallaga, el cual se posicionaría como el principal centro de producción cocalera en el país hasta el año 2011. Para 2013, el valle albergaba el 83% del total de hectáreas cultivadas en esta cuenca, y el 16% del total cultivado a nivel nacional (UNODC; Devida, 2015, pp. 31, 34)

Gráfico 2. Cantidad de hectáreas cultivadas de coca ilícita en el valle del Monzón entre 2001 y 2015



Fuente: Elaboración propia sobre la base de UNODC 2001-2015.

La importancia económica de esta actividad se comprende observando que, en la cuenca baja del Monzón, el 94,8% de jefes de hogar encuestados se dedicaban a la agricultura, y el 78,9% de ellos declaraba dedicar tiempo al cultivo de coca (Devida, 2015, pp. 35, 36). Asimismo, se percibe al advertir que en la zona mencionada, el 67% de los jefes de hogar había nacido en otra localidad (Devida, 2013, p. 20). Así, del total de agricultores encuestados por Cenagro (INEI, 2012) en el distrito del Monzón, el 30% declaró tener como lengua materna el quechua, mientras que el resto tendría el castellano, a excepción de una persona que señaló el asháninca.

Un rasgo relevante para contextualizar el territorio es que el 56,3% de los agricultores de la cuenca baja del Monzón cuenta con un área menor o de hasta tres hectáreas (Devida, 2013, p. 26), lo cual se vuelve problemático si se reconoce que la hoja de coca no resulta rentable en extensiones de ese tamaño (Zevallos, 2014, pp. 102, 103). A su vez, se relaciona con el hecho de que el 89% de los agricultores del distrito del Monzón declarara que los ingresos de la actividad agropecuaria no eran suficientes para cubrir sus gastos, por lo que el 77% dejaba de trabajar en su unidad para conseguir otros ingresos (INEI, 2012). Estos trabajos, sin embargo, son usualmente empleos no calificados, en tanto el nivel de educación del 64% de la población alcanzaba, como máximo, la primaria completa (INEI, 2007).

En ese sentido, dedicarse a la hoja de coca en estas localidades, más que ser una ocupación que genera grandes riquezas a los productores, es la que mayores ventajas comparativas ofrece en un contexto de alternativas limitadas. Esta situación se evidencia al observar que, en 2007, el 81,2% de los habitantes del Monzón vivía en hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha, y el 43,8% en hogares con dos o más (Zevallos, 2012, p. 45). Antes de la erradicación, la tasa de hogares sin servicios de información y comunicación era de 95% —contra un promedio nacional de 47%—, mientras que solo el 10% tenía acceso a electricidad y el 22% a sistemas de alcantarillado y drenaje (Heuser, 2017, p. 115). Asimismo, la pobreza en el valle ascendía al 66,4% en 2009, mientras que el IDH de 2012 marcaba una cifra de 0,28, en comparación a un 0,51 de promedio nacional (Devida, 2015, p. 16). Es así que Devida (2013, p. 41) estimó que, si la economía del hogar solo se sustentara en la comercialización de cultivos lícitos, en el Monzón existiría un 86% de pobreza total y una pobreza extrema del 70%.

4.2. Proceso histórico

Esta fuerte articulación con la economía ilícita se posibilitó principalmente por la limitada presencia estatal durante los años previos a la implementación de políticas nacionales. Esto, a su vez, fue facilitado por la misma geografía del territorio, caracterizada por colinas escarpadas y un único acceso a través de una vía sin asfaltar (Heuser, 2017, p. 115). Así, por muchos años, actores no estatales tuvieron una

fuerte injerencia en el valle y su economía. La Poderosa Federación de Cocaleros del Valle del Monzón (PFCVM), reconocida como el gremio más importante del Alto Huallaga, mantuvo una alta influencia en los gobiernos locales y regionales, ya sea mediante la adherencia del alcalde al gremio o su apoyo a la defensa de la hoja de coca (Casas, 2015, p. 3). Asimismo, firmas locales y grupos terroristas estaban presentes en el territorio, participando de diferentes formas en la economía ilícita y la defensa del cultivo (Casas, 2015, p. 3).

Si bien el aumento progresivo del cultivo de coca en Huánuco data de 1945, es a partir de la llegada de los cárteles de Colombia y México que los niveles de producción y comercialización de la droga en el Alto Huallaga incrementan exponencialmente, generando un ciclo de auge que duraría desde 1970 hasta 1995 (CVR, 2003, p. 312). En esta época, la alta demanda y precio de la hoja de coca fomentaron el involucramiento de la población en esta actividad, así como la inmigración desde la sierra de Huánuco, Pasco y Áncash a las provincias de Leoncio Prado y Huamalíes (CVR, 2003, pp. 312, 313).

En respuesta a este fenómeno, durante las décadas de 1970 y 1980, el Estado impulsó una política contra el narcotráfico basada en programas de erradicación, sustitución, e interdicción policial, las cuales centraban sus esfuerzos principalmente en los productores de hoja de coca (CVR, 2003, pp. 312, 740). En respuesta a la implementación de estas políticas, se motiva la fundación de colectivos en defensa de la hoja de coca, así como manifestaciones a manera de huelgas, marchas y bloqueos de caminos (Durand, 2005, pp. 120; Cabieses, 2007, p. 89). A pesar de la instalación de diálogos directos entre los dirigentes cocaleros y representantes del gobierno, se registran continuas acusaciones respecto al incumplimiento de actas por parte de Devida, falta de compromiso gubernamental para dialogar u ofrecer programas de desarrollo alternativo rentables, así como un intento por descabezar la organización cocalera mediante el encarcelamiento de su dirigencia (Cabieses, 2007, p. 90; La República, 23 febrero, 2 marzo, 20 abril 2003).

Durante los 2000, en el valle del Monzón persistía el rechazo a las autoridades y el desarrollo alternativo, por lo que se los califica de ser los campesinos «más radicales», que «rechazan toda forma de acuerdo y reclaman al gobierno que declare legales los cultivos de la zona» (La República, 17 febrero 2004a). De esta manera, cuando se habla de la ausencia institucional en el territorio, los documentos y actores estatales suelen señalar que era el TID el que generaba escenarios de alta tensión y conflictividad que limitaban el alcance de las políticas y programas públicos (Devida, 2015, p. 15). Así, el énfasis en la responsabilidad se delega a los actores presentes en el valle, quienes habrían obstaculizado el trabajo del Estado, dificultándoles el ingreso al Monzón. Esta es también la opinión del funcionario del Corah entrevistado, quien señalaba que fue la colusión entre organizaciones cocaleras, subversivos y autoridades locales lo que impedía el ingreso estatal.

Sin embargo, fue posible recoger testimonios de funcionarios que, no concordando con lo señalado, plantearon que la demora en intervenir en el valle respondió a decisiones institucionales. Así, invitan a pensar que la caracterización del valle como un espacio violento e inseguro sería, más que una explicación para la inacción estatal, una manera de justificarla. Estas opiniones plantean que el Estado contaba con los recursos necesarios para ingresar al Monzón si así lo hubiese querido, y que ha sido su falta de decisión política, y los intereses privados de ciertas instituciones estatales, lo que ha retrasado su ingreso.

4.3. Proceso de implementación de iniciativas estatales en materia de lucha contra las drogas

Al trazar las iniciativas estatales dirigidas a la lucha contra el narcotráfico y la retoma del control territorial en el valle del Monzón, la primera etapa a considerar es la de los operativos policiales. Dentro de estas intervenciones, puntuales y esporádicas, una de las más relevantes fue el Operativo Fierro, ocurrido el 6 de noviembre de 2003. Este marcó el inicio del «ingreso» estatal al valle, razón por la cual es importante analizar cómo se desarrolló este primer acercamiento. Para ello, resulta relevante la publicación que el Ministerio del Interior (2004) hizo sobre la incursión, en la cual se presenta al Monzón como un «territorio liberado para el delito, marcado por la muerte, la destrucción y el sufrimiento para más de 20 mil peruanos de escasos recursos» (p. 7).

A pesar de que estos operativos tienen un impacto limitado a nivel de desarticulación del narcotráfico, su importancia es simbólicamente alta en tanto exponen la maquinaria estatal en un territorio cuyas dinámicas se apoyan en la ausencia del Estado. Sin embargo, los efectos de estos operativos se tornan más directos al observar la desarticulación de La Poderosa Federación de Cocaleros del Valle del Monzón (PFCVM), gremio reconocido como el más importante de la zona del Alto Huallaga, tanto por los agricultores como por los funcionarios públicos (Casas, 2015, p. 8). A través del Operativo Eclipse, ejecutado el 26 de noviembre de 2010, se detuvieron a más de cuarenta personas —campesinos cocaleros, dirigentes gremiales y autoridades públicas—, denunciándolos de colusión con el narcotráfico y terrorismo de la zona (Manrique, 2015, p. 78; Casas, 2015, p. 8). Para Valle Riestra y Vidal (2014), la detención de siete dirigentes del gremio cocalero, entre los cuales se encontraba Iburbio Morales —en ese momento alcalde del Monzón—, habría mermado la capacidad de oposición de la Federación, generando su pérdida de protagonismo. Este evento, junto con la captura del líder del Comité Regional del Huallaga de Sendero Luminoso, Florindo «Artemio» Flores Hala, el 12 de febrero de 2012, son eventos señalados como claves para el ingreso estatal al valle (Devida, 2015, p. 11).

En este contexto, el 28 de agosto de 2012, en la localidad de Tamshi, en el distrito de Rupa Rupa, el Corah realizó un operativo de erradicación. Si bien esta localidad está fuera del ámbito formal del valle, la población —considerando a Tamshi parte del Monzón y pensando que se continuaría con la erradicación en sus centros poblados— se movilizó hacia la localidad para detener el operativo. A raíz de ello, se generó un enfrentamiento entre los trabajadores del Corah, resguardados por policías y militares, y los agricultores, quienes también habrían ejercido violencia contra los efectivos. Es en este enfrentamiento que fallecen dos personas, Reider Roque Romero y Juan Espinoza Jaimes, quienes se encontraban en la zona como espectadores. A juzgar por los eventos que acontecerían los meses siguientes, se entiende que este evento marcó de manera importante a la población del Monzón. Esta, meses más adelante, vivirá la erradicación de sus parcelas, esta vez sin mostrar oposición física alguna.

Cabe resaltar que, antes de la erradicación, en el valle se vivieron tensiones respecto a la defensa de la hoja de coca, principalmente en relación con el rol del gremio cocalero. Esto porque, en su intento de evitar el ingreso de los operativos de erradicación, este también se oponía a iniciativas que los productores consideraban beneficiosas, como la construcción de una carretera asfaltada a Tingo María o la posibilidad de negociar una erradicación a cambio de programas alternativos. Así, en ciertas localidades del valle se habrían gestado iniciativas para negociar una erradicación progresiva, mediante la cual se asegurara un mayor apoyo en la transición a cultivos alternativos. Al fin y al cabo, gran parte de la población —si bien tenía la coca como principal fuente de ingresos y estaba interesada en que esta no sea erradicada— la concebía como un recurso ilegal, por lo que no se sentía tranquila dedicándose a ella. Sin embargo, la negativa del gremio a negociar ni permitir el ingreso de programas estatales al Monzón habría obstaculizado estas iniciativas, exacerbando un malestar que se venía generando hacia los dirigentes cocaleros.

Nosotros nos ponemos de acuerdo de la margen izquierda [del río Monzón] [...] para hacer firmar el convenio para [...] ir erradicando según que va avanzando el producto alternativo, eso era de nosotros nuestra idea. Pero [...] la Poderosa Federación se dan cuenta, [...] «ningún programa alternativo debe de entrar al Valle de Monzón porque ellos son los únicos poderosos y reyes del valle». [...] Por eso nosotros quedamos sin nada, sino nosotros hubiéramos quedado en la margen izquierda con la coca y con nuestro producto alternativo, pero [...] por culpa de ellos quedamos nosotros sin nada. (Agricultora, adulta, Cachicoto)

Así, el 18 de enero de 2013 el Corah ingresó al valle, erradicando las plantaciones de coca de los caseríos de la parte baja del Monzón, luego continuando con la alta. La sensación general expresada por los y las entrevistadas era de resignación, ya que consideraban que no tenían posibilidades de evitar lo que estaba ocurriendo. Solo aquellos que contaban con recibos para la Empresa Nacional de la Coca (Enaco)

podieron mantener la cantidad de arrobas que durante años habían entregado a la institución, de manera que se aseguraba la eliminación de todo el producto dirigido al narcotráfico. Debido a que parte de la población sostenía su economía únicamente a través de la coca, la preocupación se vivió también los meses posteriores a la erradicación.

Las consecuencias socioeconómicas de la erradicación —principalmente sobre la seguridad alimentaria— son conocidas por las instituciones estatales (Devida, 2015, p. 570), razón por la cual el Corah y Devida consideran necesario llevar a cabo programas de acompañamiento después de la intervención. A pesar de las iniciativas ejecutadas, la eliminación compulsiva de la coca generó en la población un fuerte rechazo a las siguientes iniciativas en el valle, las cuales se implementarían en el marco del programa de poserradicación, iniciado en julio de 2013. Por ello, como estrategia local, los representantes de la institución en el valle se desvincularon discursivamente de la erradicación previamente implementada, señalando que esta era producto de una política estatal que los sobrepasaba. Así, los funcionarios planteaban que, si bien estaba prohibido sembrar coca en los terrenos seleccionados para cultivos alternativos, era «cosa de ellos» si la cultivaban en zonas más alejadas del valle, aunque señalando que muy probablemente esta sería erradicada nuevamente por el Corah (Casas, 2015, p. 15). Esta estrategia, a través de la cual el Estado se mostraba como un ente con distintos frentes, objetivos y procedimientos, permitió que parte de la población se empezara a acercar a Devida, desligándola de las acciones del Corah y viendo en ella una posibilidad para mejorar la situación en la que su familia se encontraba. Sin embargo, los centros poblados no reaccionaron de manera homogénea a la llegada de la poserradicación, siendo que, mientras que algunos estaban muy interesados en beneficiarse de sus programas, otros no se vincularían hasta años más adelante².

Así, el ingreso de Devida a los diferentes caseríos se enmarcó en dinámicas internas de conflicto y organización, a través de las cuales la población concertaba si deseaba o no vincularse a sus programas. Sin embargo, la firma del acta comunal no debe interpretarse como signo de armonía en la relación entre los agricultores y la institución, en tanto el inicio de esta estuvo sumamente marcado por la tensión y necesidad. Existen casos en los que un caserío firmante tiene muy poca de su población trabajando con Devida, como ocurre en Cachicoto, Cashapampa y Sachavaca, donde menos del 10% de la población se ha vinculado con la institución estatal³.

² Resulta importante resaltar que Tamshi centro, en el distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, firmó su Acta de Compromiso con Devida recién el 11 de mayo de 2017, cuatro años más tarde de que la institución empezara su trabajo en el valle. Esto, puede imaginarse, se relaciona con los hechos ocurridos en agosto de 2012, aunque no se haya tratado el tema directamente con ninguno de los entrevistados.

³ Información obtenida a partir del padrón de participantes inscritos en el Programa de Poserradicación de Devida, actualizado al 25 de agosto de 2018.

Firmar un compromiso directo con Devida implica para los agricultores, por un lado, recibir apoyo individual a manera de insumos agrícolas y asistencia técnica, así como, por otro, comprometerse a no resembrar coca. El no cumplir con esta última condición tiene consecuencias legales, en tanto el decreto legislativo 1241 penaliza la resiembra de coca con condenas de tres a ocho años de prisión (Manrique, 2015, p. 83). A partir de tres testimonios recogidos en el valle fue posible conocer que ya existen casos de agricultores que, acusados de resembrar, han sido citados por la Fiscalía.

Para comprender esta situación, es necesario ahondar en los costos y beneficios que el desarrollo alternativo significa para los agricultores del valle. Debido a las características geográficas del territorio, los cultivos que Devida promueve son el cacao, en zonas de menor altura, y el café, en parcelas de territorios más altos. Por esa razón, los agricultores de la cuenca baja suelen dedicarse al primer cultivo y los de la alta al segundo. Sin embargo, debido a que algunos agricultores cuentan con parcelas en diferentes localidades, se tiene que algunos cuentan con ambos.

A partir de la información presentada en las cartillas de Devida tituladas «Costos en las etapas de instalación, crecimiento y producción-flujo de caja» (Tablas 2 y 3), es posible conocer, aproximadamente, cuál es la inversión y ganancia que el café y cacao significan para un productor agropecuario.

Tablas 2 y 3. Costos e ingresos por el cultivo de una hectárea de cacao y café (en nuevos soles)

Costos e ingresos por el cultivo de una hectárea de cacao (en nuevos soles)							
	1er año	2do año	3er año	4to año	5to año	6to año	7mo año
Costos	4848	2592	3093	2801	3011	3011	3011
Ingresos por cacao	0	476	2040	4760	8160	8160	8160
Ingresos por plátano	0	4500	7500	4500	0	0	0
Ganancia	-4848	2384	6447	6459	5149	5149	5149

Costos e ingresos por el cultivo de una hectárea de café (en nuevos soles)							
	1er año	2do año	3er año	4to año	5to año	6to año	7mo año
Costos	3677,5	3323	6590,5	4266,5	5166,5	5566,5	5566,5
Ingresos por café	0	0	1400	2800	5600	7000	7000
Ingresos por plátano	0	3000	4500	3000	1500	0	0
Ganancia	-3677,5	-323	-690,5	1533,5	1933,5	1433,5	1433,5

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Devida, 2014a, 2014b.

A partir de los datos presentados por la institución, se entiende que una hectárea de cacao requiere una inversión de S/ 4848 el primer año, período durante el cual

no se percibe ningún ingreso. Esta inversión sería recuperada al tercer año, cuando los ingresos por el cacao y el plátano —sembrado para dar sombra al cultivo principal y generar ingresos temporales— cubrirían los gastos hasta ese momento y generarían las primeras ganancias al agricultor. Por su parte, el café no solo implica una inversión bastante más alta sino que su producción también demora más y genera menores ingresos. Por ello, aun cuando el café es bien manejado bajo sistemas agroforestales, recién es posible recuperar la inversión y recibir ganancias a partir del sexto año.

En ese sentido, los cultivos alternativos requieren que la población cuente con otros ingresos durante tres y seis años, según el producto. Esto se agrava considerando la degradación de los suelos del Monzón, lo cual genera que la producción de cultivos no solo demore más tiempo sino que también sea menor en volumen e implique una mayor inversión. En respuesta a esta problemática inició, en 2015, el proyecto «Recuperación de suelos degradados por el cultivo de coca con fines ilícitos». Aunque la iniciativa ha tenido éxito en el valle, el problema radica en haber empezado el tratamiento de los suelos dos años después de iniciado el desarrollo alternativo. Así, la iniciativa ha llegado tarde para aquellos productores que, afiliados al programa de Devida, invirtieron en terrenos no aptos para la producción de café ni cacao, llevándolos a la pérdida de su tiempo y dinero.

Esto ha tenido consecuencias negativas para la relación entre Devida y los agricultores, mellando su confianza en el personal de campo de la institución. Asimismo, los productores denuncian que estos actores tergiversan la realidad del valle, comunicando que los cultivos lícitos se están cosechando de manera exitosa y registrando fotográficamente solo aquellos que no han sido afectados por enfermedades. Finalmente, existen reclamos respecto a que la asistencia técnica brindada es de baja calidad por el poco interés y conocimiento de la zona de los extensionistas, quienes, junto con los funcionarios, se denuncia que absorberían gran parte del dinero destinado a los agricultores. Al respecto, cabe resaltar que gran parte de las dificultades mencionadas se relacionan con el hecho de que Devida actúe de manera aislada en el Monzón, principalmente por la dificultad que tiene para convocar en el territorio a otras entidades públicas. A pesar de que esta institución es la encargada de coordinar esfuerzos para incidir en zonas coccaleras, la entidad recibe poca respuesta de parte de los demás ministerios, los cuales, se señala, tienen otras prioridades.

4.4. Estrategias de vida de agricultores del valle del Monzón

En este contexto de transformación, la población del Monzón ha modificado sus estrategias de vida en diferentes grados y direcciones. Las prácticas previamente desplegadas para acceder a sus medios de vida no tienen la misma efectividad en la actualidad; lo cual ha sido acompañado por la generación de nuevas perspectivas y discursos sobre el contexto actual. A la vez, existen estrategias que permanecen y han

sido reforzadas a partir de las intervenciones estatales. Así, antes que una homogeneidad en las estrategias de los agricultores, se evidencia la existencia de nuevas y antiguas diferencias entre ellos.

4.4.1. Narrativas desplegadas por los agricultores entrevistados

Como se ha mencionado previamente, tanto antes como durante la implementación de iniciativas estatales, actores como la prensa y el personal de campo difundieron discursos que tendían a criminalizar las dinámicas del valle, enfatizando la existencia de un vínculo entre los cocaleros y narcotraficantes. En respuesta a ello, se encuentran narrativas de defensa que, negando las imágenes externamente construidas sobre el Monzón, replantean el imaginario sobre cómo era el valle en el pasado.

Así, además de diferenciarse de los narcotraficantes y la cocaína, algunos agricultores niegan la figura de «tierra de nadie» acuñada al valle, señalando que era un lugar tranquilo. Sin embargo, esta narrativa se torna frágil en la mayoría de los casos, en tanto los entrevistados recuerdan los asesinatos y desapariciones ocurridas en el Monzón durante la época del terrorismo. Se entiende que, tras años de defensa colectiva a la hoja de coca —en los que el discurso sostenido ante cualquier extraño negaba la presencia de caos y violencia—, la primera reacción ante preguntas sobre el pasado busque asegurar que en el valle se gozaba una vida pacífica. Sin embargo, la indagación sobre la vida cotidiana y las sensaciones que esta generaba muestra que, previo a la erradicación, muchos agricultores vivían en constante temor por las incursiones de Sendero Luminoso en la zona, sin necesariamente vincularlos directamente con el narcotráfico⁴.

A la par, se registra otra narrativa que deslegitima el cultivo de coca de manera tajante, señalando que ha llevado a la población a la ociosidad y la vida fácil. Este grupo indica que la alta rentabilidad del cultivo permitió a los dueños contratar personal y no trabajar sus parcelas, razón por la que conceptualizan los ingresos percibidos como «dinero fácil», el cual habría inducido a la población al despilfarro. Así, se crea una idea de que el dinero del narcotráfico es dinero *sucio* y *efímero*, que no contribuyó a una auténtica mejora de las condiciones de vida del valle, sino más bien al desarrollo de actividades como la borrachería y la prostitución, así como a la expansión de violencia familiar y delincuencia. Bajo esta perspectiva, la ilegalidad de la planta es un aspecto que, por sí mismo, carga negativamente la actividad, haciendo posible su comparación con otros delitos.

⁴ Si bien esto no descalifica la interrelación entre ambos fenómenos, puede comprenderse que, a nivel de experiencia cotidiana, los agricultores no hayan percibido el ejercicio de violencia directa contra ellos por parte de narcotraficantes, mientras que sí por terroristas. Respecto a los primeros, la violencia vinculada a su presencia se recuerda más por los enfrentamientos que ocurrían entre ellos, antes que por aquellos entre ellos y la población.

En contraste con esta posición se encuentra una narrativa que, si bien deslegitima el cultivo de coca ilícita, la matiza contextualizando las motivaciones que impulsaban la actividad. Como en el grupo anterior, estos productores le confieren una carga moral negativa a la coca por su ilegalidad, caracterizándola como algo que «no es bueno», y al traslado a cultivos alternativos como un «cambio de vida». Sin embargo, señalan que las ganancias recibidas por el cultivo servían para cubrir sus necesidades básicas —alimentación, principalmente— y asegurar el acceso de sus hijos a educación superior. En ese sentido, aunque ilícita, para estos agricultores la coca fue un vehículo que aseguraba la movilidad social familiar a través de la profesionalización de los hijos. Por ello, su deslegitimación se matiza porque su fin no era el despilfarro ni la *vida fácil*, sino el acceso a mejores condiciones de vida y la formación de sus hijos en instituciones educativas de mayor calidad.

En la actualidad, la forma de acceder a mejores oportunidades cada vez se relaciona menos con la vinculación a una economía ilícita, y más a un acercamiento a actores estatales. Aunque en los años previos a la erradicación existían disputas en el valle respecto a si permitir o no el ingreso del Estado, hoy en día, aún entre los agricultores que defienden el cultivo de coca y reclaman la ineffectividad de Devida, está presente la demanda por un mayor apoyo estatal.

Como señala Heuser (2017, pp. 133), tras la intervención estatal hay una creciente expectativa porque los actores institucionales apoyen el desarrollo de la región proveyendo alternativas rentables y construyendo infraestructura. Asimismo, la población relaciona la presencia estatal con algunas características de cambio en el valle, tales como menor violencia, «desorden» —principalmente por la reducción de la vida nocturna y el consumo de alcohol— y mayor seguridad. Esta tendencia es, además, reforzada por nociones extendidas por los mismos actores estatales, quienes presentan sus intervenciones como una vía hacia el desarrollo, contraponiéndolas con las actividades ilícitas, a las cuales caracterizan como obstáculos para que el valle prospere.

Esto tiene amplias consecuencias para Devida, siendo que es la institución estatal con mayor presencia actual en el valle. Por esa razón, los agricultores canalizan a través de ella todas las demandas que tienen hacia el Estado, aun cuando estas sobrepasan sus posibilidades y competencias. La incapacidad de Devida —así como cualquier institución aislada— para hacerles frente se traduce en un alto descontento, por lo que, si bien la población desea una mayor presencia estatal en el territorio, Devida no goza de completa legitimidad ni confianza en el valle. Prueba de esto es que el 6 y 7 de marzo de 2018 el Frente de Defensa de la provincia de Leoncio Prado haya convocado a un paro macrorregional, en el que una de las principales demandas era el retiro de Devida del valle del Monzón (Inforegión, 28 de febrero 2018). De la misma manera, se registraron testimonios que denunciaban malas prácticas de la institución, a la cual se considera desleal en la difusión de sus resultados. En los casos más extremos, los tes-

timonios responsabilizan al Estado de fenómenos como el hambre y la delincuencia, considerando que sus intervenciones no han proveído de alternativas viables a los campesinos, sino que más bien han agudizado sus necesidades.

4.4.2. Prácticas desplegadas por los agricultores entrevistados

Además de las diferencias registradas a nivel discursivo, también se observa una alta heterogeneidad en las prácticas desplegadas por los agricultores a partir de la implementación de iniciativas estatales en el valle. Como se ha mencionado previamente, la creciente demanda internacional por pasta básica y clorhidrato de cocaína provocó en el Alto Huallaga un aumento en la producción de hoja de coca y en la migración de pobladores andinos que veían en el narcotráfico una oportunidad para vincularse al mercado como peón o jornalero (Van Dun, 2009, pp. 90-96; CVR, 2003, p. 383). Por ello, cuando inició la erradicación, en el Monzón habitaban dos tipos de agricultores: los permanentes (locales) y los estacionales (migratorios). Respecto a los segundos, se señala que su dinámica se caracteriza por una movilización constante, en tanto se trasladan por el país buscando los territorios que mejores oportunidades económicas puedan ofrecerles. Por esa razón, cuando se busca entender por qué la cantidad de viviendas desocupadas en el distrito del Monzón pasó de 1,7% en 2007 a 9,8% en 2017 (INEI), suele responderse aludiendo a este grupo de actores.

Sin embargo, no todos los foráneos que llegaron al Monzón se fueron de él cuando llegó la erradicación, tal como lo demuestra el que 8 de los 32 entrevistados no hayan nacido en el valle. Las razones principales que explican su estadia fueron la falta de dinero para movilizarse, tener una avanzada edad, contar con hijos pequeños, así como considerar que los costos del traslado serían más altos que sus beneficios. A pesar de ello, a partir de los testimonios se puede inferir que, en comparación a los foráneos, fueron pocos los locales que adoptaron esta estrategia. Respecto a ellos, las razones que explican su mudanza fueron: se trasladaron a las chacras que tenían en otras zonas; decidieron irse porque no contaban con hectáreas suficientes para dedicarse a cultivos lícitos; o tenían contactos que podían acogerlos en otras zonas del país. Sobre ellos se tiene que, en la actualidad, muchos están retornando al valle, ya sea por la dificultad de adaptarse a dinámicas diferentes a las rurales o por las precarias condiciones de vida que implicaban sus nuevos lugares de residencia.

Una estrategia más compartida por los agricultores locales es aquella en la que uno o varios miembros de la familia migra con el objetivo de generar dinero y enviar remesas. Esto suele realizarse por el padre de familia, aunque se ha registrado también que en varios casos son los hijos, ya jóvenes-adultos, quienes envían ingresos económicos para que sus padres puedan vivir sin ejercer un trabajo remunerado en el valle.

En este punto resulta relevante reflexionar sobre la forma en que las dinámicas del comercio internacional de cocaína impactan en aquellas sostenidas a nivel local. Los territorios vinculados a la cadena global del narcotráfico son múltiples, y su relevancia económica cambia en el tiempo por diversos factores, tales como qué tan estratégica resulta su posición territorial en un momento determinado, o si están siendo intervenidos por iniciativas dirigidas a la desarticulación del narcotráfico. Así, en el escenario de la economía ilícita actual, espacios como Puno cobran mayor relevancia, a la par que disminuye la de territorios como el Monzón, lo cual tiene consecuencias en las estrategias desplegadas por la población vinculada a este mercado. A partir de lo conversado en el valle, se encuentra que la migración a otros territorios cocaleros es una práctica desplegada por los agricultores, quienes se basan en esta economía para acceder a sus medios de vida a nivel individual y familiar.

La economía actual sigue siendo coca, pero no porque producimos harta coca aquí, sino porque nuestra gente, [...] van siguiendo la ruta del narcotráfico, pero tienen sus familias aquí, aquí viven. [...] Esas personas van, trabajan ahí, van a cosechar, van a trabajar, y traen la economía acá. Traen la economía, traen el dinero, ya traen sus mil, dos mil dólares, le dejan a la familia, entonces ese dinero es lo que se mueve aquí. No es netamente el cacao, no es netamente de la, del café, es también de la hoja, de la coca, es del narcotráfico. (Agricultor, adulto, Cachicoto).

Aunque en muchos casos estas migraciones son intermitentes —los individuos van a trabajar por períodos cortos y luego vuelven a su hogar—, deben estudiarse sus consecuencias en la esfera familiar, en tanto varios entrevistados señalan que estaría generando rupturas a nivel de parejas y entre padres e hijos.

Dentro de la población que decidió mantenerse en el Monzón, también se evidencian diferencias en la modificación de las actividades económicas y sus resultados en la satisfacción de sus necesidades individuales y familiares. Existen agricultores que, por contar con pocas hectáreas en zonas de baja productividad y difícil acceso, al trasladarse a cultivos alternativos encuentran que su mantenimiento resulta más caro que los ingresos que genera. Además, la ubicación de sus parcelas dificulta el traslado de abonos y herramientas a sus chacras, así como el de sus cosechas a mercados. Por ello, este grupo no se sostiene a partir de cultivos alternativos, sino a través de la migración de un miembro de la familia, el envío de remesas desde fuera del distrito, desempeñando trabajos de servicios a otras familias, y sembrando cultivos de pan llevar.

Por otro lado, quienes cuentan con hectáreas de mayor productividad —aun siendo 5 ha o menos—, han tenido un mayor éxito con los cultivos alternativos, en la mayoría de los casos de la mano con Devida. Esto, sin embargo, es acompañado por la venta de animales, el trabajo en locales de servicio como bodegas y pequeños restaurantes —que pueden o no ser de su propiedad—, y como transportistas en

mototaxis, entre otros. Si bien este grupo ha ampliado sus actividades laborales, la diferencia con el anterior está en las ganancias monetarias que estas les generan, así como en el capital principal en el que se sostienen.

Por otra parte, existen agricultores que han decidido no vincularse a los programas de Devida, a pesar de también haber visto erradicada su coca. Es el caso de quienes, contando con credenciales educativos y habilidades no agrícolas, han optado por estrategias fuera del marco de los beneficios de Devida, sin que esto signifique una alta devaluación de sus condiciones de vida. En contraposición, se encuentran quienes no se han vinculado a la institución porque, además de dedicarse a sus chacras, realizan trabajos temporales esporádicos en empresas privadas. Por esa razón, tienen dificultades para asistir a las capacitaciones de Devida, a la vez que reconocen descuidar sus cultivos. Estos agricultores no suelen pedirle apoyo a la institución —por considerar que exige más de lo que beneficia—, o se retiran del programa una vez que no logran cumplir con las responsabilidades que conlleva.

Finalmente, algunos agricultores han optado por apoyarse principalmente en la economía de los cultivos alternativos. Esto porque cuentan con mayores extensiones de tierras productivas, las cuales, con el apoyo de Devida, registran un buen rendimiento de cultivos alternativos. Para estos agricultores, así como para quienes no tuvieron el mismo éxito, queda claro que las tierras explotadas para la producción de coca no tienen los nutrientes que requieren el café o el cacao. Esto, principalmente, porque el producto ilícito implicó el uso intensivo de agroquímicos que deterioraron las tierras. Por ello, dentro de este grupo también se encuentran quienes no contaban con hoja de coca al momento de la erradicación, lo cual amplió sus oportunidades de éxito en el cultivo de café o cacao.

A pesar de las diferencias encontradas entre los agricultores del Monzón, es necesario señalar que entre ellos existen prácticas compartidas. En el aspecto productivo, ya no es común optar por el monocultivo de ningún producto, sino que se prefiere una diversificación entre productos comerciales y de pan llevar. Otro cambio se encuentra en que, a diferencia de la hoja de coca, que era comprada directamente en las chacras, actualmente los productores deben buscar el mercado en el que venderán el café o cacao, por lo que la figura del intermediario cobra importancia aún en los afiliados a cooperativas agrícolas. Debido a que las cooperativas no cuentan con los recursos para comprar la producción de todos sus socios, y existe una urgencia monetaria en la mayoría de la población, los agricultores prefieren vender sus cultivos a un menor precio con tal de recibir un pago inmediato por ellos. Esto, a la vez que reduce la posibilidad de obtener un pago justo por sus cultivos, dificulta la consolidación de una de las únicas organizaciones que agrupa a los agricultores actualmente.

5. CONCLUSIONES

A partir de lo explicado es posible observar que, con el ingreso estatal al Monzón, han surgido cambios y permanecido continuidades en la población del valle. A pesar de que las intervenciones y paquetes entregados han sido los mismos, las diferencias de capitales en los agricultores han generado que sus respuestas a las iniciativas estatales varíen. A partir de la interrelación entre las políticas implementadas y las estrategias desplegadas, es posible identificar —entre los agricultores observados—, la existencia de al menos tres grupos de productores.

Un primer grupo se refiere a aquellos que, estando mejor posicionados durante la época de la coca, sufrieron un menor impacto negativo a causa de la erradicación y, a la vez, se benefician en mayor medida del programa de desarrollo alternativo. Esto se debe a que, si bien las pérdidas económicas fueron más altas para los productores con más cicales, estos agentes también detentaban un mayor capital financiero generado por la producción de coca ilícita, lo cual les permitió contar con bienes y/o activos que ampliaron su margen de respuesta ante la erradicación. Así, si bien esta los perjudicó, son quienes mayores posibilidades han tenido para recuperarse de la intervención. En esa línea, estos agricultores valoran en gran medida el apoyo de Devida, en tanto les ha aliviado la carga económica que habría implicado el traslado a cultivos lícitos después de la erradicación. Así, sostienen narrativas que deslegitiman las dinámicas vinculadas al cultivo de coca, a la vez que reclaman una mayor atención estatal; ya que consideran que es a través de ella que el valle tiene mayores oportunidades de progresar.

Si bien este grupo ha mantenido una posición de ventaja en ambos escenarios —durante y después de la coca—, se observa el caso de un grupo cuya posición ha mejorado a partir de las intervenciones estatales. Se trata de quienes no tenían cicales al momento de la erradicación, ya que, aunque no hayan vistos reducidos sus cultivos, la entrada de Devida en el territorio se presentó como una oportunidad de recibir apoyo técnico y material. Son estos agricultores quienes poseen el mayor capital natural en el valle, ya que sus parcelas no solo no se encuentran degradadas sino que ya estaban iniciadas en el cultivo de productos como el café y cacao, además de otros dirigidos a la venta y/o autoconsumo. Es por ello que estos agricultores presentan narrativas que legitiman la presencia de actores estatales en el territorio, en tanto es a partir de su entrada que han obtenido mayores oportunidades para desarrollarse económicamente.

Finalmente, el tercer grupo identificado es aquel conformado por productores cuyas oportunidades eran limitadas en la época del narcotráfico, y ahora también presentan menores posibilidades de beneficiarse de las iniciativas estatales. A pesar de ser quienes mayor soporte necesitan, son también quienes menores condiciones tienen para maximizar el potencial que este apoyo podría significarles;

principalmente porque poseen parcelas de menor extensión y capacidad productiva. Esta falta de capital natural ha dificultado su éxito con cultivos alternativos, frustrando sus expectativas y generándoles pérdidas de tiempo y dinero. Debido a que su inversión en café o cacao fue impulsada por Devida, los agricultores perciben haber sido engañados por el Estado, razón por la que presentan narrativas que deslegitiman sus instituciones.

Sin embargo, parte de los entrevistados de este grupo considera que, a pesar de no haber tenido éxito con los cultivos lícitos, es mediante un mayor apoyo estatal que mejorarán sus condiciones de vida. Así, en lugar de rechazar la presencia de instituciones en el valle, reclaman un mayor compromiso con la población. Al respecto, es importante problematizar el significado que el Estado tiene en este escenario, ya que se presenta, por un lado, como una institución que violenta los medios de vida de los agricultores, pero que a la vez es la fuente que mayores oportunidades puede brindarles. A partir del material recogido se entiende que esta imagen del Estado se ha construido principalmente a través de dos vías. Por un lado, a un nivel discursivo que vincula los programas estatales al «desarrollo», contraponiendo las actividades económicas previas del valle como moralmente negativas debido a su ilegalidad⁵. A un nivel práctico, es el Estado el actor con mayor poder económico y político actual en el valle, cuyas inversiones se dirigen directamente a ampliar la economía agrícola de la población, la cual cuenta con limitadas oportunidades fuera de las ofrecidas estatalmente. En ese sentido, no debe asumirse que el Estado goza de una legitimidad total en el valle, en tanto, por un lado, gran parte de la vinculación de los agricultores sigue una lógica instrumental que no necesariamente se mantendrá constante, y por otro, no todos quieren apoyarse en él para ampliar ni acceder a sus medios de vida.

En esa línea, es necesario reparar en los agricultores que mencionaron no estar afiliados al desarrollo alternativo. A partir de los datos del Censo Nacional de 2017 y el padrón actualizado de participantes de Devida, en agosto de 2018 solo el 15% de la población de los caseríos firmantes del valle se había inscrito al programa. Debido a que no todos los caseríos del valle han aceptado el ingreso de Devida, si es que se hiciera el cálculo para el total del Monzón, la proporción de beneficiarios sería menor. A partir de las entrevistas es posible comprender que algunos pobladores se mantienen al margen de la iniciativa porque, a partir de su capital humano, pueden sostenerse en otras actividades económicas. Sin embargo, están quienes no se vinculan por no tener la capacidad de responder a los compromisos que ello implica, como es el caso de quienes tienen empleos temporales que no les permiten un trabajo a

⁵ La posibilidad del Estado de otorgarle la legalidad o ilegalidad a una actividad es, por sí mismo, un evento a problematizar. Más aún cuando la legitimidad de esta decisión se justifica aludiendo a que lo ilegal es intrínsecamente incorrecto.

tiempo completo en sus parcelas. A la par, los testimonios muestran que son las adultas mayores —más aún cuando no cuentan con familiares que puedan ayudarlas activamente— quienes mayores dificultades presentan para hacerse cargo de cultivos alternativos, en tanto estos implican un trabajo físico muy demandante. Por ello, es necesario superar las nociones que caracterizan a los agricultores que no se vinculan con Devida como personas que apuestan por la resiembra de coca ilícita o buscan una «salida fácil» evitando el café o cacao por implicar mayor carga laboral. Esto permitirá revisar las barreras institucionales que podrían estar profundizando la exclusión de ciertos grupos.

Finalmente, es necesario hacer ciertas precisiones respecto al rol que tienen los diferentes capitales en este contexto. Son el capital financiero y el natural de los que, en el escenario actual, dependen en mayor medida las estrategias de vida a emplear por los productores. Esto porque, en términos agrícolas, son estos los que influyen más en el éxito o fracaso de la producción de nuevos cultivos. En un nivel medio se encuentra el capital humano, el cual ha expandido las posibilidades de algunos individuos respecto a cómo obtener sus medios de vida. Sobre el capital social, a pesar de que sea valorado a nivel discursivo, es poco utilizado en tanto los agricultores no suelen priorizar la organización comunal como estrategia de vida. Los productores siguen optando por producir y comercializar sus productos individualmente, además de trabajar sus parcelas de manera atomizada. A pesar de ello, un aspecto en el que este capital ha tenido alta relevancia ha sido en la migración y traslado a actividades no agrícolas de los pobladores del valle, en tanto el acceso a estas estrategias ha sido mediante el apoyo de familiares o conocidos. Finalmente, el capital físico —entendido como infraestructura, medios de producción y tecnología— en el valle es sumamente limitado. El disponible es accesible a los productores a través de instancias comunales, siendo que son las cooperativas las que suelen contar con la tecnología para transformar el café y cacao en productos con valor añadido.

Respecto al capital financiero, es necesario problematizar el rol que está cumpliendo —y que antes cumplía— en el valle. Usualmente, las diferencias en rentabilidad entre la coca y los cultivos alternativos son desestimadas a partir del carácter ilícito de la primera. Si bien es cierto que no es posible la competencia económica entre ambos productos, debe reflexionarse sobre cuáles son los gastos en los que la población ha dejado de incurrir a partir de la erradicación. Los impactos de esta en la reducción del acceso a educación escolar ya han sido documentados por Dammert (2008). Sin embargo, a través de la experiencia del Monzón se observa que esta también implica una reducción en las oportunidades de profesionalización de los jóvenes de la cuenca cocalera.

La dedicación a una actividad ilícita no ha significado en los cocaleros la construcción generalizada de ideales transgresores. En su lugar, el cultivo de coca ha sido una

vía para satisfacer sus necesidades básicas y aumentar las posibilidades de sus sucesores de acceder a la movilidad social mediante vías lícitas y socialmente legítimas. La universidad ha sido la institución a la que más han aspirado las familias cocaleras, siendo que en la actualidad esta posibilidad solo se mantiene viable dentro de los grupos más privilegiados. Reconociendo el rol que cumple el acceso a educación en la estratificación de los grupos sociales, es urgente adoptar acciones en esta materia, de manera que no se amplíen las brechas de desigualdad entre agricultores.

Finalmente, es relevante reparar en las consecuencias diferenciadas de la intervención en los hombres y mujeres del valle, reconociendo la existencia histórica de brechas de género en el acceso a capitales. Si bien se requiere una investigación especializada en esta problemática, es posible reconocer desde ya la presencia de vulnerabilidades en las mujeres, principalmente las adultas mayores. Durante el trabajo de campo se reconocieron las dificultades de este grupo para realizar el trabajo físico agrícola, más aún cuando no cuentan con redes sociales de apoyo.

En conclusión, se encuentra que la implementación de iniciativas estatales en el Monzón ha tenido efectos diferenciados en las estrategias de vida adoptadas por los agricultores. Estas han variado a partir de los capitales a los que los productores han accedido, así como a factores como su edad y género. Debido a que la actividad económica principal del valle fue afectada directamente por la intervención, estos actores han debido modificar sus dinámicas laborales, lo cual les ha significado, según el caso, la generación de nuevas oportunidades o vulnerabilidades. Esto se ha dado en un contexto en el cual Devida, aun ejecutando programas que buscan desarrollar de las potencialidades del Monzón, ha tenido dificultades para atender las necesidades que se presentan en el valle. Por ello, se considera indispensable un trabajo multisectorial que atienda las necesidades históricamente desatendidas en el territorio, a la par que se propone priorizar el reforzamiento de los componentes de gestión comunal y asociatividad del plan poserradicación, en tanto son los que mayor potencial tienen para mejorar, a nivel colectivo, las condiciones de vida de los agricultores.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cabieses, H. (2000a). Balance de la situación regional: preguntas y propuestas sobre desarrollo alternativo. En Sepia, *El problema agrario en debate* (Vol. 8). Lima: Sepia. Recuperado de http://sepia.org.pe/facipub/upload/cont/880/cont/file/20080903030806_Hugo_Cabieses__BALANCE_DE_LA_SITUACION_REGIONAL.pdf
- Cabieses, H. (2000b). Desarrollo alternativo en el Perú: debates, tipologías y reconsideraciones. En Cepes, *Debate agrario: análisis y alternativas* (Vol. 32). Lima: Cepes. Recuperado de <http://www.cepes.org.pe/debate/debate32/04-articulo-da32.pdf>
- Cabieses, H. (2007). Coca compleja, drogas y cocaleros en los Andes. Hablan los diablos. En B. Cáceres, H. Cabieses, A. Durand. R. Soberón, R. Rumrill, *Amazonía, coca y*

- narcotráfico en el Perú. Versión recargada*. Lima: Programa Democracia y Transformación Global. Recuperado de <http://democraciaglobal.org/wp-content/uploads/Hablan-los-diablos-1.pdf>
- Cabienes, H. (2010). El «milagro de San Martín» y los síndromes del «desarrollo alternativo» en el Perú. En Transnational Institute, *Informe sobre políticas contra drogas* (34). Recuperado de <https://www.tni.org/files/download/brief34s.pdf>
- Casas, F. (2015). Determinantes de la capacidad estatal como componente para el alcance estatal en territorios inseguros: el caso de la política antidroga implementada en Monzón. En *VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (ALACIP)*. Congreso llevado a cabo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Recuperado de <http://files.pucp.edu.pe/sistema-ponencias/wp-content/uploads/2014/12/Frank-Casas-ALACIP.pdf>
- Chambers, R. y Conway, G. R. (1992). *Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century*. [material para el Institute of Development Studies]. Brighton: IDS. Recuperado de <https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/775/Dp296.pdf?sequence=1>
- Chiriboga, M. (2010). Dinámicas territoriales rurales en América Latina. En Eutopía. *Revista de Desarrollo Económico Territorial*, (1), 51-68. <https://doi.org/10.17141/eutopia.1.2010.934>
- Cliche, G., Ranaboldo, C. y Serrano, C. (2015). *Enfoque territorial para el empoderamiento de la mujer rural en América Latina y el Caribe*. Lima: IEP. Recuperado de http://rimisp.org/wp-content/files_mf/1464971135LibroALCdigital2016.pdf
- Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) (2003). La región nororiental y el narcotráfico. En CVR, *Informe final* (pp. 309-398). Lima: CVR. Recuperado de <http://cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20IV/SECCION%20TERCERA-Los%20Escenarios%20de%20la%20Violencia/Historias%20Regionales/1.4%20REGION%20NOR%20ORIENTAL.pdf>
- Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) (2013). *Diagnóstico socioeconómico y ambiental de la cuenca baja del valle del río Monzón* [diapositivas]. Recuperado de <https://es.scribd.com/document/361847377/Diagnostico-Cuenca-Baja-Valle-Monzon-2013>
- Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) (2014a). *Diagnóstico socioeconómico y ambiental de la cuenca baja del Valle del río Cultivo del cacao. Costos en las etapas de instalación, crecimiento y producción – flujo de caja* [manual]. Lima.
- Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). (2014b). *Cultivo del café. Costos en las etapas de instalación, crecimiento y producción – flujo de caja* [manual]. Lima.
- Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) (2015). *Recuperando el Monzón*. Lima: Observatorio Peruano de Drogas. Recuperado de <https://www.devida.gob.pe/documents/20182/96750/MONZON-LIBRO.pdf/48402eed-0e54-471a-a536-c50a20eca68e>
- Dammert, A. (2008). Child labor and schooling response to changes in coca production in rural Peru. *Journal of Development Economics*, 86, 164-180. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2007.06.007>

- Damonte, G. (2011). *Construyendo territorios: narrativas territoriales aymaras contemporáneas*. Lima: Grade, Clacso. Recuperado de <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Peru/grade/20120208015759/ConstruyendoTerritorios.pdf>
- Department for International Development (DFID). (1999). *Sustainable Livelihood Guidance Sheets* [material de guía]. Recuperado de <http://files.ennonline.net/attachments/871/dfid-sustainable-livelihoods-guidance-sheet-section1.pdf>
- Durand, A. (2005). El movimiento cocalero y su (in)existencia en el Perú. Itinerario de desencuentros en el río Apurímac. *Bulletin de l'institut français d'études andines*, 34(1), 103-126. <https://doi.org/10.4000/bifea.5651>
- Durand, J. (2016). El que puede puede. Dinámicas informales e ilegales en los espacios rurales. En J. Durand, J. Urrutia y C. Yon (eds.), *Perú: El problema agrario en debate* (Vol. 16). Lima: Sepia. Recuperado de http://sepia.org.pe/facipub/upload/cont/1412/cont/files/1_PONENCIA%20DE%20BALANCE%20-%20Jose%20Francisco%20Durand.pdf
- Farrington, J., Carney, D., Ashley, C. y Turton, C. (1999). Sustainable Livelihoods in Practice: Early Applications of Concepts in Rural Areas. *Natural Resource Perspectives*, (42). Londres: Overseas Development Institute (ODI). Recuperado de <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/2877.pdf>
- Grillo, L. (2019). *Después de la coca: iniciativas estatales en materia de lucha contra las drogas y estrategias de vida en el valle del Monzón* (tesis de licenciatura). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Recuperado de <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/14227>
- Gootenberg, P. (2008). *Andean cocaine. The making of a global drug*. Durham, NC: The University of North Carolina Press.
- Gootenberg, P. (2010). *La invención de la cocaína: la historia olvidada de Alfredo Bignon y la ciencia nacional peruana, 1884-1890*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Heuser, C. (2017). Después del auge. Campos de poder en el valle del Monzón. *Revista de Ciencia Política y Gobierno*, 4(7), 109-136. <https://doi.org/10.18800/rcpg.201701.005>
- Inforegión (28 de febrero de 2018). Alcaldes del Monzón no se plegarán a paro macroregional. *Inforegión*. Recuperado de <http://www.inforegion.pe/249225/alcaldes-del-monzon-no-se-plegaran-a-paro-macroregional/>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2007). *Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda*. Lima: INEI.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2012). *IV Censo Nacional Agropecuario*. Lima: INEI.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2017). *Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas*. Lima: INEI.
- La República (23 de febrero de 2003). Cocaleros de los ríos Apurímac y Huallaga en pie de guerra. *La República*. Recuperado de <https://larepublica.pe/politica/356721-cocaleros-de-los-rios-apurimac-y-huallaga-en-pie-de-guerra>

- La República (2 de marzo de 2003). Cocaleros deciden hoy si reanudan huelga. *La República*. Recuperado de <https://larepublica.pe/politica/358860-cocaleros-deciden-hoy-si-reanudan-huelga>
- La República (20 de abril de 2003). Diez mil cocaleros marchan hoy hacia el Centro Histórico. *La República*. Recuperado de <https://larepublica.pe/politica/355568-diez-mil-cocaleros-marchan-hoy-hacia-el-centro-historico>
- La República (17 de febrero de 2004a). Nadie puede erradicar sembríos de hoja de coca en el valle del Monzón. *La República*. Recuperado de <https://larepublica.pe/politica/365765-nadie-puede-erradicar-sembrios-de-hoja-de-coca-en-el-valle-del-monzon>
- Manrique, H. (2015). Política de drogas y narcotráfico en el Perú: del triunfalismo peruano al laberinto de la cocaína. *Revista Cultura y Droga*. Caldas, 22, 64-85.
- Ministerio del Interior (Mininter) (2004). *Operación Fierro 2003. Relato visual del operativo antidrogas Fierro 2003 en el valle del Monzón*. Lima: Mininter.
- Morse, S., McNamara, N. y Acholo, M. (2013). *Sustainable Livelihood Approach: A critical analysis of theory and practice*. Dordrecht: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-6268-8>
- Parra y Guerra, E. (2014). Desarrollo alternativo en el Perú: treinta años de aciertos y desaciertos. *Perspectivas Rurales: Nueva Época*, 12(23), 85-104. Recuperado de <http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/perspectivasrurales/article/view/5599/5477>
- Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC). (2004-2016). *Monitoreo de cultivos de coca en el Perú* [informe]. Lima.
- Portes, A. (1998). Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. *Annual Review of Sociology*, 24, 2-23. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.24.1.1>
- Schejtman, A. y Berdegué, J. A. (2004). *Desarrollo territorial rural: Debates y Temas Rurales*. Recuperado de http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1363093392schejtman_y_berdegue_2004_desarrollo_territorial_rural_5_rimisp_CARdumen.pdf
- Scoones, I. (1998). *Sustainable rural livelihoods. A framework for analysis*. [material para Institute of Development Studies]. Brighton: IDS. Recuperado de <https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/3390/Wp72.pdf?sequence=1>
- Scott, J. (1998). *Seeing like a State: how certain schemes to improve the human condition have failed*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Valle Riestra, E. y Vidal, N. (2014). Ahorita nos erradican, mañana ¿qué comemos? *IDL-Reporteros*. Recuperado de <https://idl-reporteros.pe/«ahorita-nos-erradican-manana-¿que-comemos»/>
- Van Dun, M. (2009). *Cocaleros. Violence, Drugs and Social Mobilization in the Post-Conflict Upper Huallaga Valley, Peru* (tesis PhD). Universidad de Utrecht, Países Bajos.
- Vizcarra, S. (2018). *La economía moral de la ilegalidad en la ciudad cocalera: significados y prácticas legitimadoras del narcotráfico en la ciudad de Pichari (2000-2017)* (tesis de doctorado). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Recuperado de <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/12532>

- Zevallos, N. (2012). *El impacto de las estrategias de control de cultivos en la dinámica de la defensa política de la hoja de coca en el Perú* (tesis de maestría). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Recuperado de <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/4901>
- Zevallos, N. (2014). Hoja de coca y la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2007-2011: el problema público en el control de cultivos. *Revista de Ciencia Política y Gobierno*, 1, 97-113.
- Zevallos, N. y Mujica, J. (2015). Consideraciones para una política de drogas desde un enfoque de seguridad humana. En N. Zevallos y J. Mujica (eds.), *Herramientas y métodos de análisis sobre el tráfico de cocaína* (pp. 18-37). Lima: Devida, Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Laboratorio de Criminología y Estudios sobre la Violencia.